

NÚMERO: 60 / 2024

Unidad Administrativa  
Área de Eficiencia y Racionalización  
Técnica de la Contratación

Exp.: ECON/000056/2022-SOLPE  
2022130054- (MO001)

## RESOLUCIÓN

De la Consejera-Delegada de la Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid, por la que se acuerda la modificación del contrato suscrito con la empresa **INDRA SOLUCIONES TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, SLU.**

## ANTECEDENTES

**PRIMERO.-** El día 31 de agosto de 2023, se adjudicó el contrato basado en el Lote 1 del Acuerdo Marco ECOM/238/2020 denominado **“SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y OFICINA DE GOBIERNO TIC DEL MODELO DE HISTORIA SOCIAL ÚNICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID”, EN EL ÁMBITO DEL “PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA –FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA – NEXT GENERATION EU”**, cuyo número de expediente que se refiere *ut supra*, a la empresa **INDRA SOLUCIONES TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, SLU.**, por 1.887.672,60 euros IVA Incluido (1.560.060, IVA excluido), tras el correspondiente proceso de licitación, como contrato basado del Acuerdo Marco de la Agencia previamente adjudicado mediante la Resolución 624/2021, 15 de diciembre de 2021 , de la Consejera Delegada de Madrid Digital.

**SEGUNDO.-** El proyecto de Servicios de Consultoría y Oficina de Gobierno TIC del modelo de Historia Social Única (HSU) de la Comunidad de Madrid, que se lleva a cabo con servicios de este contrato, contribuye significativamente a la transformación digital de los servicios sociales. La HSU estará englobada en un marco tecnológico innovador que garantice la interoperabilidad entre todos sus componentes digitales, procesos y servicios.

Transcurridos varios meses desde el comienzo de la ejecución del contrato, y debido al avance y evolución de los trabajos de consultoría del mismo, fruto de las definiciones y análisis realizados en el seno de más de diez grupos de trabajo creados a este fin, con participación de más de cien personas procedentes de diversas unidades organizativas de la Comunidad de Madrid, entidades locales, etc., afloran nuevas necesidades (que se traducen en una serie de nuevos proyectos que se enumeran en el Anexo a la presente memoria) en el ámbito de los trabajos a realizar de los que la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales es responsable funcional y competencial; necesidades que se añaden de forma inseparable a las inicialmente previstas, dando origen, todas

ellas, desde el punto de vista de construcción de los sistemas tecnológicos, a un único contrato para la realización de desarrollos informáticos y su implantación, el cual se ha licitado en el mes de Julio de 2023 y se adjudicó en el mes de diciembre del 2023. Esa extensión de alcance, que se detalla más adelante, necesita igualmente una oficina de gobierno para su supervisión y control, que podría darse, teóricamente, bien con una nueva licitación –algo imposible, como se justificará más adelante- o bien con una ampliación de la oficina de control ya existente, lo cual resulta más conveniente para la Administración, conforme se argumenta más adelante.

Se considera que la modificación planteada no tiene carácter sustancial, de conformidad con lo dispuesto en el art. 205 de la Ley de Contratos del Sector Público, por cuanto no tiene como resultado un contrato de naturaleza materialmente diferente al celebrado en un principio.

**TERCERO.-** La información de partida en base a la cual se estimó el alcance económico del proyecto que contempla la oficina de gobierno fueron unas fichas con una extensión y alcance limitados, propio de un momento inicial de concepción del proyecto por parte de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales a principio de 2022. Estas fichas, no ofrecían, ni podían ofrecer en aquél momento, el nivel de detalle que, con el avance del proyecto, y con la compleja participación multilateral que se ha descrito, se ha completado e identificado como finalmente necesario.

Pasados varios meses desde el comienzo de la ejecución, con el refuerzo de las numerosas actividades de consultoría realizadas, han ido aflorando, por tanto, una serie de complejidades y nuevas necesidades que no existían en el escenario de partida, las cuales se especifican individualmente en el Anexo al final de este documento.

Por tanto, las necesidades estimadas originariamente como una relación de aplicaciones, plataformas y herramientas tecnológicas expresadas en el Anexo VII denominado “Componentes digitales incluidos en el alcance del proyecto HSU del Documento de licitación”, según ha ido madurando y profundizando el estudio de consultoría, se han visto ampliadas para cubrir las carencias detectadas en el análisis inicial y así poder garantizar la implantación de los requisitos y funcionalidades de HSU, derivadas de lo exigido en la Ley 12/2022, de 21 de diciembre, de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid y del Decreto 51/2023, de 3 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se regulan la Historia Social Única, el Registro Único de Usuarios y otros instrumentos de gestión de la información del Sistema Público de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid tanto para profesionales como para usuarios, administradores y gestores; normas que han sido aprobadas tras haberse iniciado la ejecución del contrato cuya modificación se pretende.

En esta norma se expresa literalmente “Con el fin de asegurar una prestación de servicios sociales realizada desde la perspectiva de los usuarios –y centrada en ellas–, la acción del sistema público deberá ejercerse de manera integrada y coordinada, con independencia de que en ella intervengan de forma simultánea o sucesiva las entidades locales y la comunidad autónoma y deban participar,

al mismo tiempo, diferentes sistemas públicos de protección como el sanitario, el de empleo, el educativo, el de vivienda y otros.

Estos nuevos desarrollos de integración de sistemas públicos están intrínsecamente interrelacionados de forma inseparable con los desarrollos anteriormente identificados, no siendo posible su segmentación o diferente tratamiento ya que estamos hablando de una Historia Social Única que por su propia definición legal no es susceptible de fragmentación.

En efecto, en estas circunstancias, la licitación de la extensión de las labores de gobierno para las nuevas necesidades, de solamente una parte del mismo conjunto en un nuevo contratista, derivaría en la situación de tener dos oficinas de gobierno que actuarían supervisando las actividades que realizará un mismo desarrollador, lo cual introduce un riesgo importante en la supervisión e incluso en la ejecución dado que además, los diferentes componentes a construir para atender a las diferentes iniciativas, deben estar técnicamente integrados entre sí para construir una Historia Social Única.

Complementariamente a lo señalado, y a mayor abundamiento para la justificación de la ampliación que se propone del citado contrato, se argumentan las siguientes circunstancias técnicas:

- Los nuevos componentes identificados no son sistemas separados, como ya se ha avanzado, sino que por el contrario tienen una interrelación muy estrecha con el resto de los componentes de la Historia Social Única, por lo que resultaría totalmente inconveniente y contraproducente que su dirección y gestión fuera realizada por una Oficina de Gobierno distinta que se contratara en una nueva licitación por las siguientes razones técnicas:

- Riesgo de que las prescripciones técnicas fueran interpretadas de forma diferente entre los dos contratistas. Un único desarrollador podría recibir instrucciones contradictorias desde dos direcciones facultativas distintas produciéndose confusión, retrasos o errores.
- Riesgo de que se diera solapamiento entre las competencias de cada oficina ya que no pueden segmentarse los desarrollos (“zonas grises o de intersección de actuaciones”) o discrepancias en aplicación de criterios de gobierno y alcance de cada una de las oficinas.
- La necesidad de visión única a la hora de coordinar los desarrollos no sería posible obtener ya que la existencia de dos oficinas distintas realizando la dirección facultativa de trabajos intrínsecamente relacionados generaría serios problemas de coordinación que gravarían adicionalmente también, los costes y plazos del proyecto.

- Esta interrelación entre los componentes debe estar gobernada desde una única Oficina de Gobierno para que, aparte de evitar las dificultades técnicas comentadas, poder dar cumplimiento a los principios de interoperabilidad como cualidad integral presente desde la concepción de los servicios y sistemas y a lo de su ciclo de vida, así como al carácter multidimensional de la

interoperabilidad y el enfoque único de soluciones multilaterales, recogidos en el Esquema Nacional de Interoperabilidad en sus artículos del 4 al 17 y siguientes.

- Adicionalmente la inclusión de un nuevo contratista implicaría unos esfuerzos del mismo para comprender y asimilar la complejidad de la Historia Social Única (mientras que la actual Oficina de Gobierno ya tiene los conocimientos adquiridos), los cuales junto con el retraso que se produciría por el tiempo necesario para esta adquisición de conocimientos, tiempos incompatibles con el volumen y plazos de proyectos exigidos respectivamente por su definición funcional y por el marco temporal fijados por la financiación del Fondo Europeo de Recuperación y Resiliencia, supondrían más costes adicionales en esfuerzo y tiempo que resultarían perjudiciales para la Administración, originando, muy posiblemente, retrasos y disfunciones incompatibles con los objetivos técnicos, temporales y económicos del proyecto.

- Los servicios de oficina de gobierno y dirección técnica facultativa de los nuevos componentes se van a mantener en el tiempo durante todo el periodo de construcción de la HSU (hasta diciembre del 2025). Por tanto, debe entenderse que la modificación planteada afecta a la totalidad de la vigencia del contrato por cuanto requiere un refuerzo en el equipo de trabajo de dicha Oficina Técnica durante todo el plazo de ejecución del mismo.

- Cabe resaltar, que se trata de una modificación que únicamente requiere añadir servicios adicionales que se corresponden con un incremento de horas de perfil de Jefe de Proyecto por su precio unitario según contrato, y que la descripción de los trabajos a abordar del Anexo (9. PLATAFORMA INTEGRAL DE SERVICIOS SOCIALES) no modifican su objeto, si no que se corresponden con el objeto del Lote 2 de FACTORÍA DE INNOVACIÓN DIGITAL, estrechamente vinculado al objeto del Lote 1.

**CUARTO.** - En el expediente constan tanto memoria justificativa de la Unidad Promotora motivando la modificación, informe de los servicios Jurídicos y conformidad del adjudicatario

A la vista de lo anteriormente expuesto,

#### **RESUELVO:**

De conformidad con lo establecido en el artículo 205 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 y en la cláusula 27 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del Acuerdo Marco, y de acuerdo al informe emitido por el Responsable del Contrato, modificar el contrato de referencia ampliando su presupuesto en 287.698,17 €, IVA no incluido (**348.114,79 con IVA**), cifra estimada para dar respuesta a las nuevas necesidades indicadas, para el periodo que le resta de ejecución que va desde el 1 de febrero de 2024 al 31 de agosto de 2024 (7 meses), permaneciendo el resto de cláusulas del contrato invariables.

En la tabla siguiente se especifica la relación de nuevos trabajos que se han identificado y el coste estimado de su desarrollo, junto con la estimación del incremento de alcance de los trabajos de dirección y gestión asociada para su correcta ejecución, que deberá realizar la Oficina de Gobierno.

MÓDULOS	Importe SIN IVA	Gestión asociada	Horas JP (perfil único)
<b>9. PLATAFORMA INTEGRAL DE SERVICIOS SOCIALES</b>			
<b>9.1 Discapacidad</b>	200.000,00 €	20.000,00 €	407
Gestión de Plazas de Centros de Atención a la Discapacidad (APMV): Nueva versión	200.000,00 €		
<b>9.2 Infancia y Familia</b>	1.208.814,87 €	120.881,48 €	2460
Sistema de Atención y Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia (SAPIIA)	1.208.814,87 €		
<b>9.3 Dependencia</b>	269.578,63 €	26.957,86 €	549
SIDM: Cambios estructurales relacionados con mejoras en el servicio a ciudadano	269.578,63 €		
<b>9.4 Centros</b>	269.578,63 €	26.957,86 €	549
Plataforma de Inspección de Centros y Servicios (PICS)	269.578,63 €		
<b>9.5 Integración Social</b>	471.646,68 €	47.164,66 €	960
Asistencia Material Básica	269.578,63 €		
RACS - Red Abierta de Comedores Sociales	202.068,05 €		
<b>9.6 Igualdad</b>	269.578,63 €	26.957,86 €	549
Nueva versión del Sistema de Información de Registro de Actuaciones de la Mujer (RAM2)	269.578,63 €		
<b>9.7 Juventud</b>	187.784,53 €	18.778,45 €	382
APP Carné Joven	187.784,53 €		
<b>TOTAL</b>	<b>2.876.981,97 €</b>	<b>287.698,17 €</b>	<b>5.856</b>

Madrid, a fecha de firma  
**LA CONSEJERA-DELEGADA**

[Redacted Signature]